

MUNICIPIOS POR EL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Los pasados 6 y 7 de abril de 2018, más de 40 municipios y organizaciones del movimiento feminista nos reunimos en Madrid para analizar las implicaciones del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género para los municipios. Discutimos sobre los aspectos clave para las corporaciones locales que promueve el Pacto de Estado: competencias, financiación, estándares de calidad y contratación.

Tras más de 6 meses de incumplimiento del Pacto de Estado, los municipios allí presentes acordamos elaborar este documento en común con el objetivo de conseguir el máximo número de adhesiones de municipios posible y, así, hacerle llegar al resto de administraciones la importancia y la necesidad de implementar los acuerdos adoptados en el Pacto de Estado con urgencia.

MANIFIESTO

MUNICIPIOS POR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia machista constituye una de las más habituales y flagrantes violaciones de los derechos humanos que se producen en nuestras ciudades a día de hoy. Según las cifras oficiales, desde el año 2003 hasta la actualidad, 929 mujeres han sido asesinadas, y desde el 2013, año en que comienza el recuento oficial, 24 niños y niñas han sido asesinados y asesinadas por la violencia machista. Y estas cifras representan sólo la punta del iceberg; las asociaciones de mujeres documentan un número aún mayor de casos en su trabajo cotidiano y son cientos de miles de mujeres y niñas y niños sobrevivientes de las diferentes formas de violencia machista las que no forman parte de las estadísticas oficiales y buscan apoyo y protección frente a estos graves abusos día a día.

El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, aprobado el 28 de septiembre de 2017 por el Congreso de los Diputados, reconoce las obligaciones de las distintas administraciones derivadas de la normativa española e internacional, particularmente respecto al Convenio Europeo de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul. Esta norma europea fundamental amplió la actuación de todas las administraciones públicas, incluidas las entidades locales, frente a la violencia machista en todas sus manifestaciones: además de la violencia cometida en el ámbito de la pareja o ex-pareja, se incluyen también la violencia sexual, el acoso sexual, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina, entre otras. Y en el Pacto de Estado se recoge el compromiso explícito, en la medida 204, de establecer financiación específica para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio de Estambul por parte de todas las administraciones públicas.

El Pacto de Estado confiere un papel protagonista a los municipios en la prevención, detección y atención integral frente a la violencia machista. Asimismo, establece una vía de financiación directa a la Administración local. En su medida 207 prevé que los Presupuestos Generales del Estado destinen, vía transferencia directa y finalista, un incremento anual de 20 millones de euros a los ayuntamientos durante los próximos cinco ejercicios, incluido el año 2018.

Los ayuntamientos firmantes de este manifiesto:

1.- **REAFIRMAMOS NUESTRO COMPROMISO** frente a la violencia machista y nos comprometemos a cumplir **las medidas establecidas en el Pacto de Estado** en materia de prevención, detección y atención integral frente las diferentes manifestaciones de la violencia machista.

Sin embargo, manifestamos que para cumplir con nuestras obligaciones en esta materia requerimos que de un **marco competencial claro y de una financiación estable** y suficiente que garantice los servicios necesarios de prevención y atención integral en nuestros municipios.

En términos competenciales, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) supone en la actualidad un grave impedimento para el cumplimiento del Pacto por parte de los ayuntamientos, además de una contradicción con nuestro marco competencial de obligaciones establecidas por los marcos internacionales y europeos ratificados por España, así como por la Ley 1/2004 de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Por otra parte, respecto a los municipios, como instituciones públicas más cercanas a la ciudadanía, la normativa específica y el Pacto de Estado nos atribuyen el deber de prestar una atención a mujeres y menores víctimas de la violencia machista bajo los estándares de disponibilidad, accesibilidad y calidad. Sin embargo, este reto resulta actualmente difícil de cumplir para la mayoría de municipios por carecer de una estructura profesional estable que sostenga los programas y servicios de atención adecuados.

2.- DENUNCIAMOS que más de seis meses después de su aprobación, los compromisos que deben garantizar el cumplimiento del Pacto de Estado no se han cumplido:

- * El Congreso de los Diputados no ha creado la **Comisión de Seguimiento del Pacto** de Estado prevista en la medida 208.
- * **El Gobierno central no ha presentado los proyectos de ley para acometer las modificaciones legislativas que establece el Pacto de Estado**, entre las cuales figura la reforma de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local recogida en la medida 61.
- * El Gobierno central **no ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 el compromiso económico reflejado en el Pacto de Estado**. La medida 206 prevé la creación de partidas de 100 y 20 millones de euros destinadas a mejorar la actuación de las administraciones autonómica y local, respectivamente.

3.- EXIGIMOS:

Al Congreso de los Diputados:

- * La **creación inmediata de la Comisión parlamentaria de Seguimiento del Pacto de Estado** reflejada en la medida 208.

Al Gobierno central:

- * Transferir el crédito de **20 millones anuales previstos para 2018**, comprometido en la medida 206.A, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento del Pacto por parte de los municipios a través de la prestación de servicios de detección y atención integral.
- * Presentar los proyectos de ley necesarios para acometer **las reformas legislativas contempladas en el Pacto de Estado** reflejadas en las medidas 85 y 86.3. como condición para el desarrollo efectivo y en plazo de todas las medidas comprendidas en el Pacto de Estado y para diseñar un marco normativo coherente con el Convenio de Estambul.
- * **Modificar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (LRSAL)** tal y como se contempla en la medida 61, incluyendo como competencia propia de los ayuntamientos la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención y atención integral frente a la violencia machista.
- * Adoptar las medidas legislativas y de otra índole que garanticen la **estabilidad y cualificación de las plantillas que prestan servicios** de atención a la violencia machista en el ámbito municipal y permitan contar con profesionales especializadas y contratadas en igualdad de condiciones con respecto al personal funcionario.
- * El establecimiento de un acuerdo sobre **estándares mínimos para la atención integral municipal** a las víctimas de las diferentes manifestaciones de la violencia machista, que lleve aparejado un estudio de costes por población de cara a su efectiva implantación, con el fin de garantizar una respuesta adecuada a todas las víctimas de violencia machista con independencia de su lugar de residencia.

MANIFESTO

MUNICIPIOS POLO CUMPRIMENTO EFECTIVO DO PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE XÉNERO

A violencia machista constitúe unha das máis habituais e flagrantes violacións dos dereitos humanos que se producen nas nosas cidades a día de hoxe. Segundo as cifras oficiais, desde o ano 2003 até a actualidade, 929 mulleres foron asasinadas, e desde o 2013, ano en que comeza o reconto oficial, 24 nenos e nenas foron asasinados e asasinadas pola violencia machista. E estas cifras representan só a punta do iceberg; as asociacións de mulleres documentan un número aínda maior de casos no seu traballo cotián e son centos de miles de mulleres e nenas e nenos sobreviventes das diferentes formas de violencia machista as que non forman parte das estatísticas oficiais e buscan apoio e protección fronte a estes graves abusos día a día.

O Pacto de Estado en materia de Violencia de Xénero, aprobado o 28 de setembro de 2017 polo Congreso dos Deputados, recoñece as obrigacións das distintas administracións derivadas da normativa española e internacional, particularmente respecto ao Convenio Europeo de prevención e loita contra a violencia contra as mulleres e violencia doméstica, coñecido como o Convenio de Istambul. Esta norma europea fundamental ampliou a actuación de todas as administracións públicas, incluídas as entidades locais, fronte á violencia machista en todas as súas manifestacións: ademais da violencia cometida no ámbito da parella ou ex-parella, inclúense tamén a violencia sexual, o acoso sexual, os matrimonios forzosos e a mutilación xenital feminina, entre outras. E no Pacto de Estado recóllese o compromiso explícito, na medida 204, de establecer financiamento específica para o cumprimento das obrigacións previstas no Convenio de Istambul por parte de todas as administracións públicas.

O Pacto de Estado confire un papel protagonista aos municipios na prevención, detección e atención integral fronte á violencia machista. Así mesmo, establece unha vía de financiamento directo á Administración local. Na súa medida 207 prevé que os Orzamentos Xerais do Estado destinen, vía transferencia directa e finalista, un incremento anual de 20 millóns de euros aos concellos durante o próximos cinco exercicios, incluído o ano 2018.

Os concellos asinantes deste manifesto:

1.- **REAFIRMAMOS O NOSO COMPROMISO** fronte á violencia machista e comprometémonos a cumprir **as medidas establecidas no Pacto de Estado** en materia de prevención, detección e atención integral fronte as diferentes manifestacións da violencia machista.

Con todo, manifestamos que para cumprir coas nosas obrigacións nesta materia requirimos que dun **marco competencial claro e dun financiamento estable** e suficiente que garanta os servizos necesarios de prevención e atención integral nos nosos municipios.

En termos competenciais, a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local (LRSAL) supón na actualidade un grave impedimento para o cumprimento do Pacto por parte dos concellos, ademais dunha contradición co noso marco competencial de obrigacións establecidas polos marcos internacionais e europeos ratificados por España, así como pola Lei 1/2004 de medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero.

Por outra banda, respecto dos municipios, como institucións públicas máis próximas á cidadanía, a normativa específica e o Pacto de Estado atribúennos o deber de prestar unha atención a mulleres e menores vítimas da violencia machista baixo os estándares de dispoñibilidade, accesibilidade e calidade. Con todo, este reto resulta actualmente difícil de cumprir para a maioría de municipios por carecer dunha estrutura profesional estable que sosteña os programas e servizos de atención adecuados.

2. **DENUNCIAMOS** que máis de seis meses despois da súa aprobación, os compromisos que deben garantir o cumprimento do Pacto de Estado non se cumpriron:

O Congreso dos Deputados non creou a **Comisión de Seguimento do Pacto de Estado** prevista na medida 208.

O Goberno central non presentou os proxectos de lei para acometer as modificacións legislativas que establece o Pacto de Estado, entre as cales figura a reforma da Lei 27/2013 de racionalización e sostenibilidade da Administración local recollida na medida 61.

O Goberno central non incluíu no **proxecto de Orzamentos Xerais do Estado de 2018 o compromiso económico reflectido no Pacto de Estado**. A medida 206 prevé a creación de partidas de 100 e 20 millóns de euros destinadas a mellorar a actuación das administracións autonómica e local, respectivamente.

3. **ESIXIMOS:**

Ao **Congreso dos Deputados:**

- * A **creación inmediata da Comisión parlamentaria de Seguimento do Pacto de Estado** reflectida na medida 208.

Ao **Goberno central:**

- * Transferir o crédito de **20 millóns anuais previstos para 2018**, comprometido na medida 206.A, cuxa finalidade é garantir o cumprimento do Pacto por parte dos municipios a través da prestación de servizos de detección e atención integral.
- * Presentar os proxectos de lei necesarios para acometer **as reformas legislativas contempladas no Pacto de Estado** reflectidas nas medidas 85 e 86.3. como condición para o desenvolvemento efectivo e en prazo de todas as medidas comprendidas no Pacto de Estado e para deseñar un marco normativo coherente co Convenio de Istambul.
- * **Modificar a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local (LRSAL)** tal e como se contempla na medida 61, incluíndo como competencia propia dos concellos a promoción da igualdade entre mulleres e homes e a prevención e atención integral fronte á violencia machista.
- * Adoptar as medidas legislativas e doutra índole que garantan a **estabilidade e cualificación dos cadros de persoal** que prestan servizos de atención á violencia machista no ámbito municipal e permitan contar con profesionais especializadas e contratadas en igualdade de condicións con respecto ao persoal funcionario.
- * O establecemento dun acordo sobre **estándares mínimos para a atención integral municipal** ás vítimas das diferentes manifestacións da violencia machista, que leve aparellado un estudo de custos por poboación de face á súa efectiva implantación, co fin de garantir unha resposta adecuada a todas as vítimas de violencia machista con independencia do seu lugar de residencia.

MANIFEST

MUNICIPIS PEL COMPLIMENT EFECTIU DEL PACTE D'ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

La violència masclista constitueix una de les més habituals i flagrants violacions dels drets humans que es produeixen a les nostres ciutats a dia d'avui. Segons les xifres oficials, des de l'any 2003 fins a l'actualitat, 929 dones han estat assassinades, i des del 2013, any en què comença el recompte oficial, 24 nens i nenes han estat assassinats i assassinades per la violència masclista. I aquestes xifres representen només la punta de l'iceberg; les associacions de dones documenten un nombre encara més gran de casos en el seu treball quotidià i són centenars de milers de dones i nenes i nens supervivents de les diferents formes de violència masclista les que no formen part de les estadístiques oficials i busquen suport i protecció davant aquests greus abusos dia a dia.

El Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere, aprovat el 28 de setembre de 2017 pel Congrés dels Diputats, reconeix les obligacions de les diferents administracions derivades de la normativa espanyola i internacional, particularment pel que fa al Conveni Europeu de prevenció i lluita contra la violència contra les dones i violència domèstica, conegut com el Conveni d'Istanbul. Aquesta norma europea fonamental va ampliar l'actuació de totes les administracions públiques, incloses les entitats locals, enfront de la violència masclista en totes les seves manifestacions: a més de la violència comesa en l'àmbit de la parella o ex-parella, s'inclouen també la violència sexual, l'assetjament sexual, els matrimonis forçosos i la mutilació genital femenina, entre d'altres. I en el Pacte d'Estat es recull el compromís explícit, en la mesura 204, d'establir finançament específic per al compliment de les obligacions previstes en el Conveni d'Istanbul per part de totes les administracions públiques.

El Pacte d'Estat confereix un paper protagonista als municipis en la prevenció, detecció i atenció integral davant la violència masclista. Així mateix, estableix una via de finançament directe a l'Administració local. En la seva mesura 207 preveu que els pressupostos generals de l'Estat destinin, via transferència directa i finalista, un increment anual de 20 milions d'euros als ajuntaments durant els propers cinc exercicis, inclòs l'any 2018.

Els ajuntaments signants d'aquest manifest:

1. REAFIRMEM EL NOSTRE COMPROMÍS enfront de la violència masclista i ens comprometem a complir les **mesures establertes en el Pacte d'Estat** en matèria de prevenció, detecció i atenció integral davant les diferents manifestacions de la violència masclista.

No obstant això, manifestem que per complir amb les nostres obligacions en aquesta matèria requerim d'un **marc competencial clar i d'un finançament estable** que garanteixi els serveis necessaris de prevenció i atenció integral en els nostres municipis.

En termes competencials, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) suposa en l'actualitat un greu impediment per al compliment del Pacte per part dels ajuntaments, a més d'una contradicció amb el nostre marc competencial d'obligacions establertes pels marcs internacionals i europeus ratificats per Espanya, així com per la Llei 1/2004 de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere.

D'altra banda, pel que fa als municipis, com a institucions públiques més properes a la ciutadania, la normativa específica i el Pacte d'Estat ens atribueixen el deure de prestar

una atenció a dones i menors víctimes de la violència masclista sota els estàndards de disponibilitat, accessibilitat i qualitat. No obstant això, aquest repte resulta actualment difícil de complir per la majoria de municipis per no tenir una estructura professional estable que sostingui els programes i serveis d'atenció adequats.

2. **DENUNCIEM** que més de sis mesos després de la seva aprovació, els compromisos que han de garantir el compliment del Pacte d'Estat no s'han complert:

- * El Congrés dels Diputats **no ha creat la Comissió de Seguiment del Pacte d'Estat** prevista en la mesura 208.
- * **El Govern central no ha presentat els projectes de llei per escometre les modificacions legislatives que estableix el Pacte d'Estat**, entre les quals figura la reforma de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local recollida en la mesura 61.
- * El Govern central **no ha inclòs en el projecte de pressupostos generals de l'Estat de 2018 el compromís econòmic reflectit en el Pacte d'Estat**. La mesura 206 preveu la creació de partides de 100 i 20 milions d'euros destinades a millorar l'actuació de les administracions autonòmica i local, respectivament.

3. **EXIGIM:**

Al Congrés dels Diputats:

- * La **creació immediata de la Comissió parlamentària de Seguiment** del Pacte d'Estat reflectida en la mesura 208.

Al Govern central:

- * Transferir el crèdit de **20 milions anuals previstos per 2018**, compromès en la mesura 206.A, la finalitat és garantir el compliment del Pacte per part dels municipis a través de la prestació de serveis de detecció i atenció integral.
- * Presentar els projectes de llei necessaris per emprendre les **reformes legislatives previstes en el Pacte d'Estat** reflectides en les mesures 85 i 86.3. com a condició per al desenvolupament efectiu i en termini de totes les mesures compreses en el Pacte d'Estat i per dissenyar un marc normatiu coherent amb el Conveni d'Istanbul.
- * **Modificar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL)** tal com es contempla en la mesura 61, incloent com a competència pròpia dels ajuntaments la promoció de la igualtat entre dones i homes i la prevenció i atenció integral davant la violència masclista.
- * Adoptar les mesures legislatives i d'altra índole que garanteixin **l'estabilitat i qualificació de les plantilles** que presten serveis d'atenció a la violència masclista en l'àmbit municipal i permetin comptar amb professionals especialitzades i contractades en igualtat de condicions pel que fa al personal funcionari.
- * L'establiment d'un acord sobre **estàndards mínims per a l'atenció integral municipal** a les víctimes de les diferents manifestacions de la violència masclista, que comporti un estudi de costos per població de cara a la seva efectiva implantació, per tal de garantir una resposta adequada a totes les víctimes de violència masclista amb independència del seu lloc de residència.

MANIFESTUA

UDALERRIAK GENERO-INDARKERIAREN ARLOKO ESTATU ITUNA BENETAN BETETZEAREN ALDE

Indarkeria matxista Estatu espainiarrean gertatzen den giza eskubideen urraketarik ohikoenetarikoa eta nabarmenetarikoa da. Genero Indarkeriarako Gobernuaren Ordezkaritzaren datuen arabera, 2003tik gaur egun arte indarkeria matxistak 929 emakume erail ditu, eta datu ofizialek ere aditzera ematen dute 24 haur hil dituela 2013az geroztik, horien kontaketa ofiziala hasi zen urtetik, alegia. Kopuru horiek icebergaren tontorra baino ez dira, emakumeen elkarteez are kopuru handiagoak dokumentatu dituztelako; eta horrez gain, badira indarkeria matxistaren adierazpen oso diferenteak pairatu eta bizirik dauden ehunka mila emakume eta haur, abusu horiei aurre egiteko laguntza eta babes bila.

Diputatuen Kongresuak 2017ko irailaren 28an onetsitako Genero-indarkeriaren arloko Estatu Itunak (aurrerantzean Estatu Ituna) aitortu egiten ditu Espainiar estatuaren administrazio desberdinen betebeharrak, Espainiako zein nazioarteko araudietatik eratorriak, eta aipamen berezia egiten dio *Emakumeen aurkako indarkeria eta etxeko indarkeria prebenitu eta horiei aurre egiteko Europako Hitzarmenari* (Istanbuleko Hitzarmena). Europako oinarritzko arau horrek Administrazio Publiko ororen jarduketa-esparrua zabaldu zuen, tokiko entitateena barne, indarkeria matxistari aurre egiteko haren adierazpen mota guztietan, bikotearen edo bikote ohiaren esparruko indarkeria ez ezik, sexu-indarkeria, sexu-jazarpena, ezkontza behartuak eta emakumeen mutilazio genitala ere barne hartuta, besteak beste. Estatu Itun horretan berariazko konpromiso gisa jasotzen da Istanbuleko Hitzarmenean aurreikusitako betebeharrak betetzeko berezko finantzaketa ezartzea (204. neurria).

Estatu Itunak zeregin garrantzitsua jartzen du udalerrien eskuetan, indarkeria matxistaren prebentzioaz, detekzioaz eta arreta integralaz bezainbatean. Halaber, finantzaketa-bide zuzena ezartzen du Tokiko Administrazioarekiko. 207.A neurrian aurreikusten da Estatuko Aurrekontu Orokorrek udaletara bideratzea, zuzeneko transferentzia bidez eta xede jakin horretarako, 20 milioi euro gehiago urtean, hurrengo bost urteetan, 2018. urtea barne.

Hori horrela, manifestu honen udal sinatzaileok honako hau adierazten dugu:

1. KONPROMISOA BERRESTEN DUGU, indarkeria matxistari aurre egiteko, , eta konpromisoa hartzen dugu **Estatu Itunean ezarritako neurriak betetzeko, indarkeria matxistaren adierazpen diferenteen prebentzioaz, detekzioaz eta arreta integralaz bezainbatean.**

Alabaina, aditzera eman nahi dugu esparru horretan dagozkigun betebeharrak betetzeko ezinbesteko zaizkigula **eskumen-marko argia eta finantzaketa egonkorra eta nahikoa, gure udalerrietan behar diren prebentzioko eta arreta integraleko zerbitzuak bermatze aldera.**

Eskumenei dagokienez, abenduaren 27ko 27/2013 Legea, Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzkoa, gaur egun traba handia izateaz gain, kontraesanean dago gure eskumen-markoaren harira nazioarteko eta Europako markoek –Espainiak berak eta Genero Indarkeriaren kontrako Babes Integraleko Neurriei buruzko 1/2004 Legeak berretsiek– ezartzen dituzten betebeharrekin.

Bestalde, herritarrengandik gertuago gauden erakunde publiko garen aldetik, berariazko arauak eta Estatu Itunak gure esku uzten dute indarkeria matxistaren adierazpen ororen biktima diren emakume eta adingabeei arreta emateko eginkizuna, betiere eskuragarritasun, irisgarritasun

eta kalitate-irizpide jakin batzuekin bat etorrira. Haatik, erronka hori betetzea zaila da, gaur egun, Estatu udalerrri gehienontzat, ez baitugu langile-egitura egonkorrik behar diren arreta-zerbitzu eta -programa egokiei eusteko.

2. SALATZEN DUGU, onetsi zirenetik sei hilabete baino gehiago igaro direnean, ez direla bete Estatu Itunaren betetzea bermatu beharko luketen konpromisoak.

- * Diputatuen Kongresuak ez du Estatu **Itunaren Jarraipen Batzorderik** eratu (208. neurria).
- * **Gobernu zentralak ez du lege-proposamenik aurkeztu Estatu Itunak ezartzen dituen lege-aldaketei ekiteko** (61. neurria), besteak beste, Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzko 27/2013 Legea aldatzeko.
- * Gobernu zentralak ez ditu **2018ko Estatu Aurrekontu Orokorretan sartu 100 eta 20 milioi euroko partidak**, erkidegoetako eta tokiko administrazioen jarduna hobetzera bideratutakoak, hurrenez hurren (206. neurria).

3. HONAKOA EXIJITZEN DUGU:

Diputatuen Kongresuari: Berehala eratzea Estatu Itunaren jarraipena egiteko Batzorde parlamentarioa (208. neurria).

Gobernu zentralari:

- * **2018rako aurreikusitako 20 milioiko kreditu-transferentzia egitea erabakitzea, xede hartuta udalerriek bermatzea Ituna betetzen dela, detekzio eta arreta integraleko zerbitzuen bidez, eta betiere jasangarritasun, eraginkortasun eta kalitate irizpideekin bat** (206.A neurria).
- * Behar diren lege-proiektuak aurkeztea **Estatu Itunean aurreikusitako legeak aldatze** aldera; izan ere, hori ezinbestekoa baita Estatu Itunean jasotako neurri guztiak errealitatean eta epean garatzeko eta Istanbulen Hitzarmenarekin koherentea den arau-esparru bat diseinatzeko (85. eta 86.3 neurriak.)
- * **Abenduaren 27ko Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzko 27/2013 Legea aldatzea**, udalen berezko eskumen gisa sartuta emakume eta gizonen arteko berdintasunaren sustapena eta indarkeria matxistaren prebentzioa zein arreta integrala (61. neurria).
- * Lege-arloko neurriak edo beste arlotakoak hartzea, **kualifikazioa eta egonkortasuna** bermatzeko Udal-esparruan **indarkeria matxistaren inguruko arreta ematen duten zerbitzuetako plantilletan**, eta gainerako udal-langile funtzionarioen baldintza berberetan kontratatutako langile espezializatuak edukitzea ahalbidetzeko.
- * Erabaki bat hartzea, udalek indarkeria matxistaren adierazpen ezberdinen biktimei **arreta emateko gutxieneko estandarren** gainean, betiere horiek benetan ezartzeak ekarriko lituzkeen populazio-eremuen arabera kostuen ikerketa batean oinarrituta, hartara bermatzeko erantzun egokia ematen zaiela indarkeria matxistaren biktima guztiei, bizi diren tokian bizi direla.